

C.A. de Santiago

Santiago, siete de mayo de dos mil veinticinco.

**Visto:**

En esta causa del Quinto Juzgado Civil de esta ciudad, por sentencia de once de julio de dos mil veinticuatro, se acogió parcialmente la demanda interpuesta por don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales y doña Susana Ximena Barra Rosales, condenando al Fisco de Chile a pagar a cada uno de los demandantes, a título de daño moral, la suma de \$15.000.000, más los reajustes de conformidad a la variación que experimente el I.P.C. desde el día en que la sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo y los intereses contados desde la misma fecha, señalando, además, que cada parte soportará sus costas.

Contra esa sentencia la parte demandada dedujo recurso de casación, por la causal del artículo 768 N° 6 del Código de Procedimiento Civil y, en subsidio, interpuso recurso de apelación.

Por su parte, la demandante dedujo recurso de apelación contra la misma sentencia.

**Considerando:**

**I.- En cuanto al recurso de casación en la forma de la parte demandada:**

**Primero:** Que la parte demandada, Fisco de Chile, interpuso recurso de casación en la forma esgrimiendo la causal contemplada en el artículo 768 N° 6 del Código de Procedimiento Civil, esto es, "*En haber sido dada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, siempre que esta se haya alegado oportunamente en el juicio.*", ello atendido a que en primera instancia, al contestar la demanda se opuso -entre otras excepciones- la de cosa juzgada, por cuanto los demandantes ya ejercieron una acción de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por estos mismos hechos, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada en la causa "Rosales con Fisco de Chile", de la cual conoció en primera instancia el 26° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol N° C-3302-2003, por la desaparición de su hermana, doña Jenny Barra Rosales, dictándose en dicha causa, sentencia definitiva que acogió la prescripción de la acción indemnizatoria, confirmada por esta Corte de Apelaciones y rechazado el recurso de casación en el fondo por la Corte



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QLMXXUJPTHJ

Suprema, encontrándose firme y ejecutoriada. Expone que entre ambos juicios concurriría la triple identidad, por lo que la sentencia de primera instancia debió haber acogido la excepción, rechazando en consecuencia la demandada en todas sus partes.

**Segundo:** Que en el motivo 13° de la sentencia impugnada el tribunal *a quo* rechazó dicha excepción, haciendo referencia a que si bien las partes se encuentran contestes en la existencia del referido juicio seguido ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, concluyó que, no es posible analizar la concurrencia de los requisitos de la cosa juzgada ya que consta en el expediente que el Fisco no rindió prueba alguna al efecto.

**Tercero:** Que en esta instancia el Fisco de Chile acompañó copia tanto de la demanda interpuesta ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, en los autos Rol N° C-3302-2003, como de la sentencia definitiva dictada en dicho procedimiento por el tribunal de primera instancia que rechazó la demanda en su integridad, acogiendo la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile, de aquella dictada por esta Corte de Apelaciones con fecha 22 de junio de 2009 en los autos ingresados bajo el Rol N° 888-2007 que confirmó el aludido fallo y de la sentencia dictada por la Corte Suprema de 13 de abril de 2012, en los autos ingresados bajo el Rol N° C-6582-2009, que desestimó el recurso de casación en el fondo.

De esos antecedentes, no es posible verificar la concurrencia de los elementos detallados por el demandado y que determinarían en su concepto, el rechazo de la pretensión hecha valer por cosa juzgada, desde que lo pedido no significa desvirtuar la legalidad del procedimiento seguido antes para resolver la misma materia, en el que se declaró la prescripción de la acción civil indemnizatoria intentada en contra del Estado de Chile, sino únicamente afirmar que la institución de la cosa juzgada no puede ser una excusa respecto del deber de reparar íntegramente los daños causados con la violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado, tal como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema por sentencia de 13 de octubre de 2022, en los autos Rol N° 104.558-2020.

**Cuarto:** Que para arribar a la conclusión que precede, este tribunal tiene en particular consideración, tal como se ha sostenido en otras oportunidades, que el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos establece dos obligaciones esenciales asumidas por los Estados parte: respetar



los derechos humanos y garantizar su ejercicio y goce. Por consiguiente, convencionalmente para el Estado de Chile y demás Estados parte, las consecuencias o efectos jurídicos de estos compromisos son, en términos generales, la exigibilidad inmediata del respeto de los derechos humanos, lo que acarrea la obligación de abstenerse de violarlos; y, en el plano individual, su deber de emprender las acciones necesarias para asegurar que todas las personas sujetas a su jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y de gozarlos en forma íntegra.

**Quinto:** Que sobre este punto, la Corte Suprema ha recordado que en el caso “Velásquez Rodríguez con Estado de Honduras”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sostuvo que las obligaciones antes citadas implican que el Estado está obligado a organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, “la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.” (Sentencia de la Excma. Corte Suprema de 13 de octubre de 2022, Rol N° 104.558-2020). Lo anterior es así, porque la efectividad de los sistemas internacionales de Derechos Humanos depende de la recepción de sus fuentes en el derecho interno y, en el caso de nuestro país, sus condiciones han sido definidas autónomamente por el constituyente, al establecer la jerarquía de los compromisos internacionales en el artículo 5°, inciso 2°, de la Carta Fundamental.

**Sexto:** Que, en consecuencia, el deber de todos los órganos del Estado de respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución Política de la República así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, obliga al cumplimiento de tales normas, por lo que al controvertirse el derecho a la reparación integral invocado y que se asila en tales disposiciones, por aplicación del principio hermenéutico de favorabilidad, debe escogerse y aplicarse la interpretación que sea más favorable a la vigencia de los Derechos Humanos, de manera que el tribunal debe aplicar su normativa interna de



conformidad y en armonía con las citadas normas internacionales, cumpliendo así con la obligación de hacer el adecuado control de convencionalidad, interpretando y aplicando las normas nacionales que pudieren afectar derechos humanos de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia, sin que ninguna norma del derecho interno permita alguna distinción que vaya en contra del cumplimiento de tal responsabilidad.

**Séptimo:** Que en consecuencia, la excepción de cosa juzgada en relación con la acción civil que pretende la reparación íntegra de los daños y perjuicios derivados de la ejecución de esta categoría de ilícitos, carece de relevancia, por no respetar las disposiciones imperativas inherentes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que la defensa opuesta asilada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, no puede ser acogida, debiendo primar la normativa internacional citada que impone al Estado de Chile el deber de reparar íntegramente las graves violaciones a los derechos humanos que demandan los actores en los presentes autos.

**Octavo:** Que, en síntesis y reproduciendo el razonamiento ya expresado en diversas sentencias de la Excm. Corte Suprema, como la ya citada precedentemente, y en la causa Rol N° 36.319-2019, *“no se desconoce aquí la validez y legalidad de los fallos anteriores que declaran la prescripción de la acción indemnizatoria contra el Estado de Chile, sino sólo se reconoce que la excepción de cosa juzgada derivada de esos pronunciamientos consagrada en el citado artículo 177, norma interna de carácter meramente legal, debe ceder ante el derecho a una reparación integral derivado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya referidos, que por disposición del inciso 2° del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental tienen una jerarquía superior.”*

**Noveno:** En consecuencia, el recurso de casación en la forma interpuesto será rechazado.

## **II.- En cuanto al recurso de apelación interpuesto por ambas partes:**

Se reproduce la sentencia en alzada, previa supresión, en el motivo vigésimo séptimo, del guarismo “\$15.000.000” la que se reemplaza por “30.000.000.- Asimismo, se elimina el fundamento vigésimo noveno.

**Décimo:** Que las alegaciones del demandado -reparación, prescripción y preterición legal - fueron desestimadas en extenso por la señora magistrada, conforme a los argumentos consignados en su sentencia y que esta Corte



comparte en su integridad; no obstante ello, estos tópicos resultan nuevamente cuestionados en la apelación de dicha parte, pero habrá de remitirse a los raciocinios consignados en la decisión rebatida, de manera que la revisión que se ha planteado vía apelación de los mismos, no es posible que prosperen.

**Undécimo:** Que, sin embargo, para los efectos de abordar aquel acápite de las apelaciones que resulta coincidente y que se refieren al monto indemnizatorio, no está de más señalar que los hechos dañosos de los cuales deriva la acción que se ha intentado en autos, corresponden a los mismos que dieron lugar a la decisión penal condenatoria de varios agentes del Estado, pronunciada el veinticuatro de abril de dos mil veinticuatro, en la causa criminal sustanciada ante la Ministra en Visita Extraordinaria de la Ilma. Corte de Apelaciones de San Miguel, señora Marianela Cifuentes Alarcón, en la causa Rol N° C-06-02-F “Episodio Jenny del Carmen Barra Rosales”, referida de forma precedente, pero ahora en su arista reparatoria civil; y, dada la extensión del mal causado por aquella, sin que quepa duda, como además lo razona la jueza a quo, que tales acontecimientos constituyen un delito de lesa humanidad, y que por lo mismo, recae en el Estado su resarcimiento íntegro.

**Duodécimo:** Que relacionado con esto último, en lo tocante a la indemnización por el daño producido por el ilícito penal, en su examen debe atenderse al estatuto de derechos comprometidos en la especie, que no es otro que el Internacional de Derechos Humanos, integrado por normas positivas del Derecho Internacional, conformado por Convenios, Tratados u otros institutos ratificados por Chile y que obligan al Estado a reconocer y proteger el derecho a la reparación íntegra, según lo disponen los artículos 5° inciso 2 y 6° de la Constitución Política de la República.

**Décimo Tercero:** Que no puede olvidarse el bloque normativo integrado, entre otros, por el Reglamento de La Haya de 1907, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Resolución 2005/35 de 19 de abril de 2005 de la Comisión de Derechos Humanos, que en su conjunto consagran el derecho a buscar y conseguir plena reparación, incluida restitución, indemnización, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición, imponiendo tal resarcimiento al respectivo Estado que ha violado los derechos humanos de sus ciudadanos.

Luego, y como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1, los Estados tienen el deber de pagar una justa



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QLMXXUJPTHJ

retribución a los lesionados en caso de violaciones a los derechos humanos, la que debe comprender una indemnización compensatoria del detrimento material e inmaterial que han experimentado y que debe considerar los daños psicológicos, morales, el proyecto de vida individual y colectivo y el perjuicio al patrimonio de la familia.

**Décimo Cuarto:** Que en ese contexto, ha quedado demostrado que los actores son hermanos de doble conjunción de doña Jenny del Carmen Barra Rosales, quien fue detenida en una primera ocasión en el año 1974, por un período que se extendió por 8 meses aproximadamente; y que con posterioridad, en el año 1977, con solo 23 años de edad, nuevamente fue detenida por agentes del Estado y después de haber sido torturada en diversos centros de tortura y detención, desapareció, siendo encontrados algunos fragmentos recién en el año 2001. Luego, la pretensión indemnizatoria de los demandantes, claramente deriva de la relación de parentesco con la víctima del delito de secuestro permanente, hechos que amén de no haber sido controvertidos, se encuentran comprobados con la documental agregada al proceso, demostrándose en particular del mérito de los antecedentes aportados por los testigos que comparecieron a juicio, el padecimiento de los actores por la detención y posterior desaparición de su hermana, las secuelas que tales hechos han provocado en su vida y que han debido sobrellevar por un largo periodo, considerando que a la fecha de la ocurrencia del secuestro tenían 8, 17, 26, 27 y 29 años de edad.

**Décimo Quinto:** Que acorde con todo lo señalado, la cuantificación del daño se hará prudencialmente por el tribunal, habida consideración de la naturaleza, entidad y extensión del mismo, teniendo para ello especialmente presente, las circunstancias en que se produjeron los hechos, que los demandantes fueron privados de su hermana, la edad que estos tenían a la fecha ocurrencia de aquéllos, el dolor de vivir bajo un duelo permanente y una ausencia irreparable, lo que afectó al núcleo familiar y la vida futura de todos sus integrantes, sin que existan elementos que permitan a esta Corte distinguir entre el sufrimiento de los actores, lo que lleva a determinar que debe ser compensado de una misma manera. En consecuencia, se advierte que la sentencia no ponderó suficientemente el daño causado a los actores con ocasión de la actuación de los agentes del Estado en perjuicio directo de la



hermana de aquéllos, por lo que los mismos se avaluarán prudencialmente por esta Corte, conforme a los antecedentes antes indicados.

**Décimo Sexto:** Que en el caso del Fisco de Chile la ejecución o cumplimiento de lo fallado se sujeta a las prescripciones del artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, lo que comprende que la generación de intereses sólo puede devengarse desde que el deudor incurra en mora.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en los artículos 160, 186, 768 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

**I.-** Que se rechaza el recurso de casación en la forma deducido por la demandada, Fisco de Chile, en contra de la sentencia de once de julio de dos mil veinticuatro, dictada en la causa Rol C-1619-2023, del 5° Juzgado Civil de Santiago.

**II.-** Que se confirma la referida sentencia con declaración que el monto ordenado pagar a los demandantes a título de daño moral, se eleva a la suma de \$30.000.000.- para cada uno de los actores, con los intereses corrientes para operaciones reajustables, una vez que el deudor incurra en mora.

**Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.**

**Rol Corte N° 13802-2024**

Redacción de la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernández.

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministra señora Erika Villegas Pavlich y por la abogada integrante señora Francisca Amigo Fernández. No firma la Ministra (S) señora Villegas, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QLMXXUJPTHJ

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Lilian A. Leyton V. y Abogado Integrante Francisca Amigo F. Santiago, siete de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a siete de mayo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QLMXXUJPTHJ